

Es copia. México, Diciembre de 1873.
—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el C. José Domingo Díaz, contra el Juez de 1ª instancia de Huejotzingo, por haber rematado en asta pública, la hacienda nombrada de San Lorenzo Nacatepec.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Domingo Díaz, contra la determinación del Juez de 1ª instancia de Huejotzingo, en virtud de la cual fué expropiado de su hacienda, conocida con el nombre de Nacatepec, cita en jurisdicción de San Martín Tescmelucan, supuesto su estado que es el de alegar, ante V. dice: que la historia fiel del negocio que ha dado origen al presente recurso, está manifestada perfectamente por el quejoso, y justificada con las pruebas que rindió, que son testimonios en forma de los actos á que hacen referencia.

Del estudio de esas pruebas y del de los conceptos vertidos por la autoridad responsable, en su informe de 4 de Julio último, resultan dos hechos innegables: el de haberse rematado la finca mencionada á favor del C. Lic. Fernando Mendizabal, por dos mil pesos, que ofreció al contado, y mil sin causa de réditos, cada año, hasta extinguir el valor total de la finca; que en la retasa que se hizo de ella, se valorizó en cuarenta y un mil y tantos pesos; y el de haber despojado de esa finca á su legítimo dueño, con motivo del remate, no obstante el que estuviera pendiente el juicio de tanteo, ante autoridad competente.

Sobre esos atentados jurídicos, la parte

interesada bastante ha dicho en su alegato; hay pues, que considerar ahora por V. C. Juez, con respecto al remate, que ha sido ilegal á todas luces, puesto que Nacatepec no se vendió en los términos establecidos por las leyes de la materia, sino que se regaló al solicitante, con burla y agravio gravísimo del dueño de ella.

Este agravio, evidenciado en autos, de cualquiera manera que se considere, es una infracción flagrante de las garantías que nuestra gran carta fundamental otorga á todo individuo en su artículo 16, por importar el acto reclamado nada menos que un ataque al derecho de propiedad, que ninguna ley puede favorecer ni indirectamente.

Las que hablan de las ventas judiciales, todas en cuanto cabe, son equitativas, y aunque obligan á perder al deudor una tercera parte del valor legítimo de la casa que se le vende, las otras dos le son garantidas, previniendo al efecto que se den de contado, ó de otro modo racional que concilie los intereses de los acreedores y del deudor común; y en el caso, como se palpa de los justificantes exhibidos, se precisó al deudor á perder mas de la tercera parte del intrínseco valor de su hacienda, y las otras dos fueron cedidas al representante de Mendizabal, para que con parte de sus productos abonara mil pesos al año, sin que consideraran los réditos hasta cubrir el precio ilusorio en que la compró, lo que equivale á que el deudor hubiera de perder su finca, y hasta sus productos, una vez que el comprador se aprovecha cada año de 523 pesos que forman una parte de ellos.

Tal venta como se ha demostrado, es anticonstitucional, porque expropia al C. Díaz de lo que justamente tenía adquirido, con atropello violento de cuantas leyes se hicieron valer á ese respecto. Hay que considerar además, el otro hecho comprobado en autos suficientemente, el de haberse despojado al C. Díaz de la finca, cuando estaba pendiente el juicio de retracto. Como muy bien ha dicho la misma parte interesada en

su alegato, pendiente este juicio de resolucian, debió suspenderse el curso del principal, hasta tanto se supiera quien era el legítimo dueño de la finca, para hacer su entrega en los términos convenientes; y lo que pasó al C. Díaz, no fué así, porque se le quitó la finca á pretesto de un remate que á la verdad no fué remate, lanzando á su familia del modo mas indigno y vejatorio.

Este segundo hecho tambien importa otro ataque al derecho de propiedad, y como el anterior, infringe las garantías individuales del propio artículo 16 constitucional.

Por tales infracciones, el suscrito cree que procede el recurso interpuesto por el C. Domingo Díaz, y que es de otorgársele, para que se le asegure su propiedad de la manera que lo previene el artículo invocado de la Constitucion general. En esa virtud le pide á V. tenga á bien decretarlo, en conformidad con la ley de 20 de Enero de 1869.

Zaragoza, Julio 18 de 1873.—*E. Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Agosto 12 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. José Domingo Díaz, contra el Juez de 1ª instancia del Distrito de Huejotzingo por haber violado en su perjuicio la garantía que otorga sobre la propiedad el artículo 27 de la Constitucion; el escrito de queja; el informe de la autoridad responsable; las pruebas rendidas; lo alegado, y cuanto mas que ha sido de verse.

Considerando; primero: que el quejoso se funda para solicitar el amparo y proteccion de la Justicia federal, en lo prevenido en el artículo 27 de la Constitucion, sobre que la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, cuya garantía haya sido violada en su perjuicio por el tribunal de 1ª instancia del Distrito de Huejotzingo, con el hecho de haber rematado en

asta pública la hacienda nombrada San Lorenzo Nacatepec en la cantidad de veintisiete mil y pico de pesos que formaba las dos terceras partes del precio, á pagar con mil pesos al contado y el resto con anualidades de mil pesos sin causa de réditos, solo porque adeudaba la cantidad de novecientos pesos, y ademas hubiera dado posesion al licitante no obstante que su hijo Manuel Antonio Díaz, hizo uso con oportunidad del beneficio de retracto.

Segundo: que en el caso, no puede tener aplicacion lo prevenido por el artículo constitucional, supuesto que propiamente no puede decirse que haya habido expropiacion de la finca, sino que ha tenido lugar la venta pública de ella, en virtud de la que la adquirió el licitante segun lo dispuesto por las leyes.

Tercero: que si pues el Juez omitió alguna de las formalidades legales, para la validez del acto, habiéndose apelado de su determinacion, el tribunal de 2ª instancia deberá de calificar sus procedimientos, y enmendar lo que se hubiere hecho contra la ley, y que consta en el expediente, que el quejoso al tener verificativo el remate, hizo cesion de sus bienes, cuya circunstancia le priva del derecho á sus intereses, para haber podido hacer valer el presente recurso.

Por estas consideraciones, y con fundamento ademas de lo dispuesto por el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. José Domingo Díaz, por haber sido rematada la hacienda de San Lorenzo Nacatepec por el Juez de 1ª instancia del Distrito de Huejotzingo, y que por constar al Juzgado su insolvencia no se le condena al pago de multa. Hágase saber; publíquese esta sentencia en el Periódico Oficial del Estado y Semanario Judicial de la Federacion, y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para la revision de los procedimientos.

El C. Juez de Distrito, definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó.—*An-*

tonio Rivero.—Ante mí.—Antonio García Mosqueira.

Y en cumplimiento de lo mandado en la sentencia inserta, pongo la presente para su publicacion en el Semanario Judicial de la Federacion. Puebla, Agosto 13 de 1873.—*Antonio García Mosqueira*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 6 de Noviembre de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por el C. José Domingo Díaz, contra el Juez de 1ª instancia de Huejotzingo, por haber rematado en asta pública la hacienda nombrada de San Lorenzo Nacatepec, admitiendo la postura antilegal y onerosísima para el ejecutado, de pagar la cantidad de veintisiete mil y pico de pesos, que formaban las dos terceras partes del valor de la finca, con mil pesos al contado y el resto en anualidades de mil pesos sin causa de réditos, para cubrir la pequeña suma de novecientos pesos á cuyo pago habia sido condenado el quejoso, cuando solo los arrendamientos de la hacienda producian mas de mil pesos anuales, y ademas por haber dado dicho Juez posesion de la finca al licitante, siendo así que su hijo Manuel Antonio Díaz habia interpuesto con oportunidad el retracto, cuyos actos violan en concepto del quejoso, la garantía consignada en el artículo 27 de la Carta federal porque constituyen una verdadera expropiacion.

Considerando: que en sí el remate de la hacienda de Nacatepec, no fué un acto espontáneo é inmotivado de la autoridad, sino que tuvo por causa el deber que tenia el Juez en cumplimiento de su oficio, de hacer efectivo á petición de parte, el pago de la cantidad á que habia sido condenado el quejoso como consecuencia del contrato á que se habia obligado libremente, en cuyo caso no puede tener aplicacion lo dispuesto en el

artículo 27 constitucional, sobre que la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, pues es un principio de derecho, que el que contrae una obligacion consiente en responder con sus bienes al cumplimiento de ella.

Que las irregularidades y abusos de que se acusa al Juez en el modo de verificar el remate, y para cuya reparacion existen los recursos legales ordinarios, no quitan á ese acto su carácter primordial que lo hace enteramente distinto de la verdadera expropiacion prohibida por el citado artículo 27 de la Constitucion.

Con fundamento del artículo 101 de la Constitucion, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Puebla en 12 de Agosto del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Domingo Díaz por haber sido rematada la hacienda de San Lorenzo Nacatepec por el Juez de 1ª instancia del Distrito de Huejotzingo, y que por constar al Juzgado su insolvencia no se le condena al pago de la multa.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias. Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—José M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, 21 de Noviembre de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, secretario.